

La crisis de seguridad gravita pesadamente sobre el gobierno de Felipe Calderón. La incidencia de crímenes y muertes violentas continúa elevándose y por toda la nación se reclaman acciones gubernamentales más eficaces. Las autoridades reconocen que, más allá del impacto social, la inseguridad y la violencia tienen un costo económico. Desde el punto de vista político, la ola delictiva es también perjudicial: podría costarle muy caro al partido gobernante en las elecciones intermedias de 2009.

Además del crimen callejero común, el número de secuestros en el país ha crecido con velocidad, casi 40% entre 2005 y 2007, según las estadísticas oficiales, que no reflejan muchos secuestros que no se reportan. En fecha reciente la atención se enfocó en el caso de Fernando Martí, de 14 años, hijo de un acaudalado hombre de negocios. Fue secuestrado en junio y su cadáver fue localizado en la cajuela de un automóvil el 1° de agosto.

En total, ha habido alrededor de 3 mil homicidios en lo que va del año, la mayoría relacionados con el narcotráfico. Hace poco se agregaron a la lista el asesinato de una familia completa, niños inclusive, y el descapitamiento de 12 cuerpos decapitados en el estado de Yucatán.

Después de las manifestaciones a escala nacional, a principios de septiembre la policía federal efectuó una serie de las detenciones de prominentes jefes de la droga en el estado de Tabasco, y encontró y detuvo también a cinco personas, entre ellas el líder de la banda que aparentemente secuestró y asesinó a Martí. Sin embargo, como el cabecilla es un ex policía, la detención sirvió para resaltar el nivel de participación de la propia policía y las fuerzas de seguridad mexicanas en actividades criminales.

En efecto, entre los detenidos en Tabasco estaban el titular de la comandancia de la Policía Federal Preventiva, el director de la policía estatal, el director de seguridad pública municipal y cinco comandantes del municipio de Cárdenas, todos acusados de estar en la nómina del *cártel* del Golfo. La Procuraduría General de la República (PGR) dice que casi 200 funcionarios tabasqueños han recibido sobornos de jefes de la droga y de un grupo paramilitar vinculado con el narcotráfico, *Los Zetas*.

Ejército y otros esfuerzos

Esas detenciones destacan cuán arraigada está en México la corrupción relacionada con el tráfico de drogas, y lo difícil que será cambiar la situación. Después de tomar posesión, en diciembre de 2006, Calderón lanzó una agresiva campaña militar contra el crimen organizado al movilizar cerca de 45 mil elementos militares y policías en varias ciudades del país. Sin embargo, la situación no mejora.

Los gastos gubernamentales para prevenir el delito y el sistema de justicia se elevarán. En el presupuesto para 2009 que se sometió al Congreso a principios

de septiembre el gobierno propone un aumento total de 30% en gastos de seguridad, que incluye 50% más para la Secretaría de Seguridad Pública, 25% extra para la Suprema Corte, 20% adicional para la Defensa y 13% más para la Marina.

Además, políticos y especialistas en seguridad han anuncia-

do un plan de 74 puntos de emergencia que se enfoca en el despido de policías corruptos, armas más potentes para las fuerzas de seguridad, construcción de nuevos reclusorios y mejor detección del lavado de dinero y tráfico de drogas. Sin embargo, esas medidas, que reflejan viejas promesas, quizá no tengan ningún

impacto inmediato si se considera el nivel de los retos y las debilidades institucionales no sólo de las fuerzas de seguridad, sino también del sistema de justicia.

Fallas de las políticas

Mientras tanto, la falta de avances tangibles en seguridad afecta

las calificaciones aprobatorias de Calderón. En adelante, la autoridad presidencial dependerá en gran parte de su capacidad de obtener mejoras de esta área. Los votantes bien podrían alejarse del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) durante las elecciones intermedias de julio de 2009.

La violencia también tiene impacto económico, ya que afecta a los negocios y a la inversión y obliga al gobierno a invertir enormes cantidades en seguridad. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, declaró hace poco que el crimen y la violencia le cuestan a México un punto porcentual del crecimiento del PIB anual, como resultado de la pérdida de ventas, empleos e inversión. El crimen incrementa los gastos empresariales en 5-10% anual, indicó Carstens.

El crimen también distrae la atención de otras prioridades del gobierno. Entre éstas están las reformas propuestas por Calderón al sector energético, que actualmente se discuten en el Senado. Aunque las agendas de seguridad y energética no se relacionan mayormente, cualquier debilitamiento de la posición política del gobierno por el tema del crimen puede envalentonar a la oposición para oponerse a otras de sus iniciativas. De hecho, los partidos de oposición han demostrado su poder durante las negociaciones de la reforma energética.

Al final, la crisis de seguridad agrava las preocupaciones económicas que afligen al gobierno. En agosto, la tasa de inflación llegó a su punto máximo en cinco años: 5.6%, que ha rebasado durante seis meses sucesivos la meta de 2-4% del banco central. El alto costo de alimentos, bebidas y tabaco (principales componentes del índice de precios al consumidor) ha provocado el aumento; los precios de estos componentes se elevaron 8.9% anual a agosto.

El crecimiento económico se desacelera, en gran parte debido a la reducida demanda del mercado estadounidense. Hacienda ha modificado su pronóstico de crecimiento para 2008 a 2.8%, por debajo de la cifra anterior de 3.7%, luego que la economía creció 2.8% durante el segundo trimestre. EIU espera que el crecimiento del PIB aumente 2.3% en 2008, pero por ahora pronostica una disminución a 1.6% durante 2009.

Si los niveles de apoyo de Calderón se deterioran, sobre todo en 2009, debido a la creciente inseguridad y a una economía en retroceso, la capacidad del gobierno para promover su programa legislativo y mantener sus curules en el Congreso en las elecciones intermedias se verá disminuida de manera considerable.

FUENTE: EIU



Los embates del crimen organizado han obligado a reuniones urgentes del gabinete de seguridad, encabezado por el presidente Felipe Calderón ■ Foto Guillermo Sologuren

CAOS EN LA FRONTERA NORTE

Hubo una época en que Inspiration Point, lomerío cubierto de hierba cercano al Puente del Comercio Mundial que une Nuevo Laredo, en México, con Laredo, Texas, merecía ese nombre. Decenas de miles de camiones entraban mes a mes a EU sin problema alguno. La visión que ofrecía era la un Tratado de Libre Comercio en operación.

Hoy Inspiration Point ofrece una perspectiva diferente. El puente de ocho carriles que atraviesa el río Bravo está casi siempre congestionado, y los camiones que se dirigen hacia la aduana de EU se mueven tan despacio que a veces la única señal de que sus motores siguen funcionando es el humo que despiden.

Pese a los casi 15 años del pacto comercial entre Canadá, EU y México, los principales cruces fronterizos entre estos últimos están obstruidos. El tiempo de espera para peatones y automóviles ha aumentado de manera notable desde 2001, y muchas personas se han rendido de plano.

En la mayoría de los puertos de entrada el número de cruces ha descendido, pues las personas optan por quedarse en casa. En California, los cruces anuales desde

México han disminuido casi en 11 millones desde 2003, según cifras de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El año pasado, a lo largo de la frontera de Texas, la cual incluye los puntos de intenso tráfico Nuevo Laredo-Laredo y Matamoros-Brownsville, hubo 21.5 por ciento menos cruces de peatones desde México en comparación con 1999.

El número de vehículos privados que cruzan también sufrió una caída sustancial.

En el punto de entrada a San Ysidro, en Tijuana, donde cruzan a diario 45 mil peatones y 50 mil coches, las filas parecen interminables. Los retrasos para los peatones son tan grandes —al menos una hora y a menudo dos— que han aparecido negocios informales que ofrecen asientos de última hora en automóviles que están al frente de la línea de vehículos. Los peatones pueden incluso alquilar bicicletas, lo que les permite formarse en una fila más corta.

Los académicos atribuyen el caos a la obsesión de Washington por la seguridad a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Pero también señalan que EU ha hecho poco para equilibrar ese afán de seguridad con más infra-

estructura y tecnología para reducir los tiempos de espera.

Un ejemplo son las instalaciones de carga del Puente de las Américas en El Paso, las cuales datan de los años 60. Sólo dos carriles de carga alimentan las seis cabinas de inspección primaria de la aduana, y la infraestructura no se ha actualizado al menos durante una década.

La situación es similar en Laredo, el puerto de entrada con más tráfico de carga a lo largo de la frontera de 3 mil 220 km, por donde 6 mil camiones entran en EU cada día. La instalación de inspección de carga del Puente del Comercio Mundial tiene sólo ocho casetas.

Mario Sánchez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, argumenta que, mientras las autoridades mexicanas aumentaron las casetas de inspección de 32 a 54 el año pasado, las autoridades estadounidenses no han actuado.

Para Washington, la crítica es exagerada. Pero para la mayoría de las personas que viven cerca de la frontera, los esfuerzos han resultado insuficientes y hay una sensación aplastante de que EU ha apostado a la seguridad antes que al comercio.

FUENTE: EIU

DEMOCRACIA EN APUROS

El cabestrillo con que Felipe Calderón se sujeta el brazo después de un accidente de ciclismo, a finales del mes pasado, es una metáfora de su gobierno. Asediado por la violencia criminal y una economía a la baja, Calderón parece cada vez menos capaz de imponerse, resguardado tras sus lugartenientes de confianza. Hace dos años desafió el caos en el Congreso y las calles de la capital para asistir a su toma de posesión luego de una cuestionada victoria sobre Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el futuro de la reforma energética que propone es incierto, mientras el revigorizado Partido Revolucionario Institucional (PRI) figura en varias encuestas como el probable vencedor de las importantes elecciones intermedias del año próximo.

Calderón ha enfrentado una difícil situación debido a la desaceleración de la economía estadounidense. Su promesa de ser el "presidente de empleo" se ha visto empañada. Las cifras más recientes muestran un incremento anual de menos de 330 mil empleos formales en comparación con el crecimiento de la fuerza de trabajo disponible, de casi un millón. Como en años anteriores, los demás recurrirán a la válvula de seguridad de la economía informal o harán el esfuerzo, cada vez más temerario y costoso, de trabajar sin papeles en Estados Unidos.

Parte de la economía informal ha sido controlada por el crimen organizado, y en meses recientes las bandas de narcotraficantes más violentas amplían sus esferas de interés a otras áreas lucrativas,

como el secuestro. La marcha ciudadana por la paz del 30 de agosto provocó una respuesta casi inmediata del hampa, que ejecutó una nueva ronda de decapitaciones y matanzas de policías.

De manera significativa, la marcha, aunque enorme, fue mucho más pequeña que una similar realizada hace cuatro años. A partir de entonces, la situación ha empeorado. El índice de asesinatos se ha elevado a 26 por cada mil habitantes, según el informe dado a conocer por Calderón el 1º de septiembre, lo que se compara con 18 en Colombia y poco más en la mayor parte de Europa occidental.

Los cambios legislativos evitaron que Calderón presentara en persona su Informe ante el Congreso; el rito tradicional había sido devaluado por las acciones de repulsa en la Cámara. También desistió de presentarlo a la nación en una emisión televisada. Sólo se intercalaron breves cápsulas publicitarias en partidos de fútbol y telenovelas. "Sí tenemos problemas—concluía el último—, pero los enfrentamos y vamos a vencerlos y a seguir adelante."

La reacción del empresario fue cautelosa. Ismael Plascencia, líder de la Concamin, aseveró que la inseguridad costaba a la nación 15% del PIB. En un comunicado, elogió el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, pero advirtió que la industria y la actividad económica en general reducen su ritmo. El desempleo aumenta y también la amenaza de inflación, añadía.

En su mayoría, los políticos también fueron prudentes, en vista



Los asesinatos en el país no cesan, sino que se han incrementado ■ Foto Iván Sánchez / La Jornada Michoacán

de la ráfaga de críticas que enfrentaron en marzo. El orador principal durante la protesta fue Alejandro Martí, prominente hombre de negocios cuyo joven hijo fue asesinado junto con su guardaespaldas después de ser secuestrado en un falso retén policiaco en la ciudad de México. Martí exhortó a los políticos a dimitir si no podían frenar la violencia.

Porfirio Muñoz Ledo, político veterano actualmente aliado a Andrés Manuel López Obrador, fue más lejos aún: "se tiene que acabar con el gobierno de Calderón, luego tiene que surgir un gobierno interino". Cuando se le acusó de contravenir la Constitución al incitar a un golpe de Esta-

do, Muñoz Ledo manifestó que un cambio de Constitución era exactamente lo que buscaba.

Democracia, pero no como la conoce todo el mundo

No es la primera vez que Muñoz Ledo intenta participar en la fundamental reforma política. Figura prominente en los años setenta, experimentó varias metamorfosis políticas hasta convertirse, en 2000, en aliado del entonces presidente Vicente Fox, quien le encargó presidir un grupo de trabajo para la reforma del sistema político. Sin embargo, Fox desechó todas sus sugerencias en favor de una serie de parches al

deteriorado marco establecido por el PRI durante sus siete décadas de gobierno ininterrumpido.

El resultado es una democracia idiosincrásica. Aunque persiste la no reelección, los políticos no tienen que responder a sus electores, sino, igual que con el PRI, a intereses creados en las empresas y en la corrupta estructura de los sindicatos, lo cual obstruye el camino del progreso.

El resultado ha sido una sucesión de presidentes, desde Ernesto Zedillo, el último del PRI, a Fox y Calderón, con gobiernos de minoría, cada vez más frágiles, que apenas si pueden hacer mella en el creciente embrollo legislativo

El poder y los inexplicables privilegios que ha acumulado tienen consecuencias. Y no menos en la lucha contra la delincuencia. El crimen organizado no podría actuar con impunidad si no fuera por sus conexiones políticas. Sin embargo, sólo uno de los grandes políticos ha sido encarcelado por aliarse con los criminales: Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo. Y eso fue hace nueve años.

La reforma ha tenido algunos progresos durante el gobierno actual. Se han efectuado cambios en los sistemas pensionario y fiscal, y es probable que esta legislatura apruebe una reforma a la ley de hidrocarburos. Pero, por los defectos del sistema político, estas reformas han sido resultado de transacciones que reducen su eficacia. La atención que recibirán las elecciones intermedias de julio de 2009 implica que incluso este nivel de cooperación cesará pronto. Ahora que el principal socio comercial de México se dirige a una desaceleración prolongada y su empresa estatal de petróleo lucha por mantener la producción y las reservas, el momento no podía ser peor.

FUENTE: EIU



El crimen organizado no podría actuar con impunidad si no fuera por sus conexiones políticas ■ Foto Iván Sánchez / La Jornada Michoacán